

## Licencias médicas: un fiscal con dedicación exclusiva ahora ya

Juan Manuel Fuenzalida  
Diputado



Más de 25 mil funcionarios públicos en Chile salieron del país mientras se encontraban con licencia médica. La cifra no es solo escandalosa; es un verdadero insulto a los contribuyentes y una bofetada a millones de chilenos que diariamente se esfuerzan por cumplir con sus obligaciones laborales, muchas veces en condiciones adversas.

La licencia médica existe para resguardar la salud de las personas, no para convertirse en una autorización encubierta para vacacionar o evadir responsabilidades laborales. El caso de licencias médicas en funcionarios públicos es una burla al sentido común, a la ética y, por cierto, a la ley.

Este no es un simple problema administrativo. Esto es fraude al fisco. Por eso, no basta con sanciones internas, sumarios o llamados de atención. Se requiere acción penal. Lo que está en juego es la probidad del Estado. Necesitamos con urgencia que el Ministerio Público designe un fiscal con dedicación exclusiva para investigar este escándalo en toda su profundidad.

Los funcionarios y autoridades que salieron del país con licencia médica quebrantaron no solo normas laborales, sino la confianza pública. Pero aún más grave es que esto ocurrió frente a un sistema que, evidentemente, no cuenta con los controles necesarios para evitar este tipo de abusos.

Y no, no se trata de criminalizar la enfermedad ni de estigmatizar a quienes realmente necesitan licencias médicas. Se trata de proteger el sistema de quienes lo usan como escudo para delinquir. Cada peso malversado es un peso que no llega a salud, educación, pensiones o seguridad. Cada licencia fraudulenta deslegitima a quienes sí cumplen con su deber y mancha a todo el aparato público.

El Estado no puede ser cómplice ni espectador de este tipo de abusos. Debe actuar con firmeza y sin excepciones. La ciudadanía exige justicia y merece respuestas. Este no es un tema menor ni un error administrativo: es una trama de corrupción silenciosa que ha dañado profundamente la confianza en las instituciones.

Llegó la hora de poner fin a esta cultura de impunidad. Y eso empieza por tomar esto con la seriedad que amerita: con sanciones penales, restitución de los fondos defraudados y cambios estructurales en el sistema de control de licencias médicas. Lo contrario sería seguir validando la corrupción con burocracia.